



CONFEDERACIÓN SINDICAL INTERNACIONAL

2º CONGRESO MUNDIAL

Vancouver, 21-25 de junio de 2010

RESOLUCIÓN**SOBRE****SINDICATOS MUNDIALES, EMPRESAS MUNDIALES**

1. El Congreso asevera que aunque la globalización ha transformado el mundo del trabajo, no ha alterado las cuestiones fundamentales derivadas de las relaciones entre los trabajadores/as y aquellos para quienes trabajan. Tampoco elimina la responsabilidad de los gobiernos a regular la actividad de las empresas con objeto de proteger el interés público.
2. El hecho de no abordar la dimensión social de la globalización ha exacerbado considerablemente una grave y creciente crisis de gobernanza, incluso de las empresas, y el Congreso deplora el impacto negativo que esto ha tenido sobre los trabajadores/as y las sociedades en las que viven. Las empresas mundiales se están volviendo cada vez más capaces de operar fuera de las limitaciones de la regulación nacional, y no se ha establecido ningún sistema eficaz de gobernanza internacional para garantizar que sus actividades contribuyan al progreso económico y social. La ausencia de una supervisión pública adecuada, a nivel nacional e internacional, ha fomentado una cultura de ambición corporativa e irresponsabilidad, que desencadenaría la actual situación de crisis y sufrimiento para millones de familias trabajadoras.
3. El Congreso renueva por tanto su petición de que se introduzca una regulación efectiva de las empresas mundiales por parte de los Estados individualmente a nivel nacional y colectivamente a escala regional y mundial. Dicha regulación está más justificada que nunca y resulta necesaria para reforzar la rendición de cuentas de las empresas por medio de mejores sistemas de gobernanza corporativa y la obligación de presentar informes que cubran tanto los resultados financieros de la empresa como el impacto social de sus actividades. Se requieren nuevas y mejores regulaciones para asegurarse de que las empresas paguen los impuestos que les correspondan y que el medio ambiente quede protegido de actividades empresariales que pudieran perjudicarlo. Lo que es más importante, la regulación de las actividades empresariales resulta necesaria para garantizar el respeto de los derechos sindicales y otros derechos humanos. En este sentido, el Congreso acoge con beneplácito el marco “proteger, respetar y remediar” propuesto por el Representante Especial del Secretario General de la ONU sobre los derechos humanos y las empresas, y aceptado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El Congreso toma nota de que la realización de este marco requerirá que se actúe con la debida diligencia, incorporar una definición más cabal de la complicidad y unos remedios judiciales significativos, que no resultarían posibles sin que el Estado tenga un papel firme.

4. El establecimiento de una regulación mundial apropiada de las empresas debe abordar asimismo una reforma de las Instituciones Financieras Internacionales e implica la introducción de cambios en los acuerdos comerciales y de inversiones, las normas de las agencias de crédito a la exportación, la contratación pública y la asistencia al desarrollo. Se requiere una cooperación intergubernamental a este respecto, para crear las condiciones adecuadas en que los Gobiernos consigan resistir mejor a las presiones de las empresas para obtener concesiones contrarias a los objetivos e intereses nacionales e internacionales, incluyendo objetivos medioambientales.

5. La organización cambiante de las empresas se utiliza para eludir las responsabilidades legales del empleador, lo que está teniendo como consecuencia que disminuyan los salarios, se degraden las condiciones de trabajo, se elimine o se reduzca la protección social y resulte imposible hacer valer los derechos. Se requiere una regulación para poner fin al abuso y la explotación de que son víctimas los trabajadores/as empleados en las cada vez más complejas cadenas de suministros, que no tienen acceso a la dirección de las compañías para las que se realiza realmente el trabajo. Esta omisión de responsabilidades está contribuyendo a una informalización de las relaciones de empleo, donde el trabajo se lleva a cabo al margen de cualquier marco y protección legal. Los Gobiernos deben asegurarse de que los derechos de los trabajadores/as a establecer sus propias organizaciones y a negociar colectivamente con su empleador puedan ejercerse en las pequeñas y medianas empresas.

6. El Congreso exhorta a una firme regulación de las empresas financieras privadas por parte de los Estados, actuando individualmente a nivel nacional y colectivamente a nivel regional y mundial. Dicha regulación, que debería incluir la introducción de un impuesto sobre las transacciones financieras, ha de limitar el capital desperdiciado en actividades especulativas en los mercados financieros y recentrar las inversiones en la economía productiva. Las regulaciones deben garantizar que las finanzas estén al servicio de la economía real y no a la inversa.

7. La regulación de la actividad empresarial no basta por sí sola para hacer frente a la crisis de gobernanza. El Congreso considera que debe darse prioridad a la consolidación y promoción de la representación sindical y la negociación colectiva, y al desarrollo de unas prácticas de relaciones industriales sólidas dentro de un marco regulatorio apropiado, como el mejor y más legítimo medio de hacer que las empresas mundiales sean responsables y conseguir que tengan el máximo impacto positivo sobre la sociedad.

8. El Congreso reconoce que la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) no puede asumir ni substituir el papel regulatorio del Estado respecto a las empresas, ni la negociación colectiva entre organizaciones de empleadores y trabajadores, aunque podría desempeñar un papel complementario, como parte de un marco satisfactorio de regulación que proteja, entre otras cosas, el pleno ejercicio de los derechos sindicales. Es inaceptable que las empresas puedan definir o interpretar ellas mismas cuáles son sus responsabilidades sociales, y los sindicatos tienen que oponerse a cualquier intento de utilizar la RSC a tal efecto. El beneficio para la sociedad del desarrollo sostenible no siempre se corresponde con la sostenibilidad de una compañía específica.

9. Durante la última década, el sector corporativo ha tenido que mostrar un creciente interés en el concepto de la RSC. El Congreso reconoce la necesidad de continuar manteniendo un debate público apropiado sobre la RSC, y de participar en ciertas iniciativas específicas con objeto de aprovechar las oportunidades legítimas que

ofrece y limitar posibles abusos. Los sindicatos deberían aprovechar la oportunidad que representa este interés por la RSC para garantizar el respeto de los derechos sindicales y del medio ambiente, además de para promover el diálogo entre los interlocutores sociales con vistas a alcanzar los objetivos mutuos de mejorar la competitividad de la empresa y aportar trabajo decente.

10. A este respecto, el Congreso constata el rápido incremento de los códigos de conducta sobre prácticas laborales en las cadenas de suministros y de empresas privadas que ofrecen servicios de inspección y auditoría social en relación con dichos códigos. El valor de dichos códigos ha de evaluarse en función de su contribución a la buena gobernanza, fomentando la aplicación de la ley y unas relaciones industriales bien asentadas. Los códigos no pueden aportar una protección adecuada a los trabajadores/as cuando existen obstáculos legales o políticos al respeto de los derechos humanos. Además, los procesos de certificación en lugares de trabajo no sindicalizados carecen de credibilidad. El Congreso insiste en que los procesos de inspección del trabajo deben corresponder exclusivamente a la administración pública y subraya la necesidad de reforzar los sistemas públicos nacionales de inspección, en línea con el Convenio No. 81 de la OIT sobre la inspección del trabajo y el Convenio No. 129 de la OIT sobre la inspección del trabajo (agricultura), a fin de contrarrestar la tendencia a privatizar las inspecciones. En la mayor parte de las situaciones, únicamente los sindicatos representativos de los trabajadores implicados estarán capacitados para llevar a cabo una evaluación del lugar de trabajo totalmente independiente de la dirección.

11. El reto que representa la presencia de empresas globales requiere que se refuerce la organización sindical global. El Congreso se congratula y apoya la promoción de un diálogo social internacional entre las Federaciones Sindicales Internacionales y sus homólogos a nivel sectorial y empresarial, incluyendo la conclusión de acuerdos marco internacionales o globales. Dichos acuerdos deberían proporcionar un medio para asegurarse de que la compañía cumpla plenamente con sus compromisos. Los acuerdos suelen estar suscritos conjuntamente con los sindicatos de la casa matriz de las multinacionales. De aplicarse de manera cabal y efectiva, dichos acuerdos tendrían un impacto sobre todos los trabajadores empleados directa o indirectamente por dicha empresa o bajo su autoridad, particularmente en aquellos países donde la aplicación de la legislación laboral resulta inadecuada o donde las empresas han desarrollado estrategias para librarse de una aplicación efectiva de los derechos sindicales. El Congreso pide una mayor cooperación, a través de las Federaciones Sindicales Internacionales, entre los sindicatos de los países de origen de las empresas multinacionales y de los países donde éstas se instalan, en relación con sus empleadores comunes. La CSI debería entablar conversaciones con organizaciones patronales internacionales respecto a la promoción del diálogo social a escala internacional.

Programa de Acción de la CSI

12. El Congreso instruye a la CSI y a sus organizaciones regionales, trabajando en colaboración con sus asociados en la Agrupación Global Unions y sus afiliadas, a:

- (a) promover una gobernanza efectiva de la economía mundial mediante la regulación de las empresas internacionales y a través de las relaciones industriales;
- (b) representar los intereses sindicales en el debate sobre la responsabilidad social corporativa (RSC) y participar en iniciativas de RSC cuando ello redunde en

beneficio de los trabajadores/as y sus sindicatos, siempre basándose en el papel exclusivo de los sindicatos en tanto que organizaciones representativas de los trabajadores y trabajadoras;

- (c) promover el establecimiento de las expectativas públicas internacionalmente definidas respecto al comportamiento empresarial en la Declaración Tripartita de Principios de la OIT sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social, así como las Directrices de la OCDE para las Empresas Multinacionales y dar mayor efecto a estos instrumentos tanto en el país de origen de las multinacionales como en aquellos donde se establecen y a lo largo de la cadena de producción y suministros, teniendo como objetivo último el establecimiento de normas vinculantes que gobiernen las actividades de las empresas internacionales;
- (d) lograr que las Directrices de la OCDE resulten más eficaces haciendo un mejor uso de los puntos nacionales de contacto y recurriendo más a su papel de mediación, además de fomentar que se establezca un sistema efectivo de seguimiento de la Declaración de la OIT sobre las EMN, inexistente de momento;
- (e) promover el reforzamiento de otros instrumentos internacionales relacionados con el comportamiento empresarial, como las disposiciones sociales de la Recomendación revisada del Consejo de la OCDE sobre Enfoques Comunes respecto al Medio Ambiente y el Crédito a la Exportación con Apoyo Oficial, así como en el trabajo de seguimiento de la Herramienta de sensibilización de la OCDE respecto del riesgo para las empresas multinacionales en las zonas de escasa gobernanza;
- (f) promover la adopción de directrices de la OIT respecto a la inspección privada del lugar de trabajo y la rendición de los correspondientes informes, así como en cuanto a la debida diligencia en relación con las prácticas laborales en las cadenas de suministros;
- (g) trabajar con las organizaciones internacionales, incluyendo organizaciones empresariales y patronales, para promover unas relaciones industriales internacionales con objeto de crear una atmósfera conductiva para el diálogo social y el establecimiento de acuerdos globales;
- (h) intentar reformar la gobernanza corporativa, incluyendo la prevención de la corrupción y hacer pública tanto información financiera como no financiera;
- (i) desempeñar un papel destacado en la campaña para la introducción de un impuesto sobre las transacciones financieras, de manera que la actividad comercial se oriente hacia inversiones productivas y no especulativas;
- (j) asegurarse de que los intereses de los trabajadores y sus sindicatos sean tenidos en cuenta en el futuro marco internacional respecto a las empresas y los derechos humanos propuesto por el Representante Especial del Secretario General de la ONU sobre los derechos humanos y las empresas;
- (k) oponerse a los esfuerzos por redefinir las responsabilidades de las empresas mediante iniciativas y normas privadas de RSC, incluyendo cualquier nuevo intento por parte de la Organización Internacional de Normalización (ISO) o de

organizaciones como Social Accountability International (SAI), para establecer normas relativas a cuestiones que deberían ser abordadas en procesos democráticos y representativos de política pública, o que se refieren a áreas que entran en el mandato de la OIT;

- (l) seguir apoyando campañas sobre las condiciones de trabajo en las cadenas de suministro globales, como PlayFair, que se centra en grandes eventos deportivos mundiales como la Copa del Mundo de Fútbol y los Juegos Olímpicos/Paralímpicos;
- (m) promover un comportamiento empresarial que responda a las expectativas públicas respecto a la responsabilidad social corporativa y a los principios de normas internacionales de comportamiento recogidas en instrumentos intergubernamentales autorizados;
- (n) facilitar la cooperación sindical internacional, encontrando los medios para garantizar que las inversiones en fondos de pensiones y otras formas de inversión del capital contribuyan a una amplia variedad de objetivos y actividades socialmente responsables y no conduzcan a un debilitamiento o a que se cuestionen los derechos de otros asalariados;
- (o) promover el diálogo social con objeto de anticipar los cambios estructurales en las empresas, para poder gestionarlos adecuadamente de manera que no constituyan un peligro para los trabajadores y sus sindicatos;
- (p) esforzarse por crear un entorno político y lograr que haya coherencia entre las instituciones internacionales, para contribuir así al respeto de los derechos sindicales, incluyendo el fomento y la promoción de la negociación colectiva a nivel nacional y apoyar los marcos emergentes de relaciones industriales a escala internacional; y
- (q) fomentar la cooperación en el seno del Consejo Global Unions respecto a estrategias empresariales, mediante el intercambio de información; desarrollando presiones sobre las compañías para mejorar su comportamiento y facilitar la sindicalización y la negociación; el establecimiento de redes y organizaciones sindicales dentro de las firmas multinacionales; la negociación de acuerdos marco internacionales y globales; y actividades destinadas a reforzar la cooperación sindical dentro de las cadenas de suministro y en situaciones en que las empresas operen en más de un sector.